

Señor

Juez Constitucional (Reparto)

E. S. D.

REFERENCIA: Acción pública de Amparo con Medida Provisional.

ACTORA: MARTHA MICOLTA PADILLA
C.C. 66.983.669

ACCIONADA: ARL AXA COLPATRIA
NIT: 900.577.600-0

SALUD TOTAL EPS

NORMAS VIOLADAS: Debido proceso, Igualdad ante la ley,
Dignidad de persona humana,
seguridad social (Estabilidad
laboralreforzada) y mínimo vital

MARTHA MICOLTA PADILLA, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando a nombre propio y libre de apremio, amparada en el art 86 de la constitución política, promuevo en forma respetuosa, acción pública de amparo contra las entidades: **ARL AXA COLPATRIA** y **SALUD TOTAL EPS** por virtud de los siguientes,

HECHOS.

PRIMERO: fuí vinculada mediante contrato de trabajo a término inferior a un año, a la entidad **COSMITET LTDA**, desde el 01 de febrero de 2004 con el fin de desempeñarme como personal de servicios generales.

SEGUNDO: Posteriormente, el 02 de abril del 2020, pase a estar vinculada a la entidad **COSMITET LTDA** mediante tercerización por medio de la temporal **SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS SAS -SOLASERVIS** y se me cambió el contrato a uno

de obra y labor.

TERCERO: Durante el desempeño de mis actividades tuve un accidente laboral, el 31 DE MAYO DE 2021, mientras realizaba la limpieza en un baño, el cual ocasionó que a partir de ese momento se generara un cuadro de dolor lumbar crónico, politraumatismo en codo izquierdo, acompañado de deformidad en las rodillas, con artrosis y con limitación en la marcha, hasta el punto de hacer uso de muletas.

CUARTO: La **ARL AXA COLPATRIA** me expidió el 13 DE AGOSTO DE 2021 concepto medico de rehabilitación favorable con recomendaciones médicas laborales y llevo más de un año incapacitada.

QUINTO: He estado asistiendo a sesiones de terapia con Salud Total

SEXTO: Para el 28 de abril del 2022, la entidad **SALUD TOTAL EPS** emitió nuevo concepto medico de rehabilitación desfavorable y a partir de ese momento inicié el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral que está culminado con cerca de un 12% de PCL.

SEPTIMO: El 29 de junio del 2022 mediante correo electrónico me fue notificada resolución por parte del ministerio de trabajo donde efectivamente se estaba autorizando a la entidad **SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS SAS-SOLASERVIS** mi despido, bajo el argumento de su liquidación acto administrativo que no tuvo en cuenta mi situación de salud, y mi condición de aforada por la estabilidad laboral reforzada.

No me pagan las incapacidades desde agosto de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023 y me remiten de un lado a otro EPS SALUD TOTAL Y ARL AXA COLPATRIA, con el argumento que unas son de origen laboral y otras de enfermedad general, esta circunstancia ha evitado que no me paguen los subsidios de incapacidades sin tener en la cuenta que estoy enferma y deteriorada por el problema lumbar que padezco causa del accidente de trabajo, eso hace que me encuentre en estado de indefensión frente todo lo ocurrido con mis incapacidades.

OCTAVO: La falta de pago de los subsidios de incapacidades por parte de las entidades accionadas por las dilaciones injustificadas porque en la realidad se evidencia un trato regresivo e inconstitucional, atenta contra el principio de Dignidad de Persona Humana y pone en grave riesgos otros derechos de raigambre constitucional como la vida y la salud, por cuanto estoy desprotegida a partir de esta terminación de mi contrato de trabajo, además con el agravante de la ausencia de ingresos por que no percibo ni salario ni pago de incapacidades y me encuentro en una situación de

extrema pobreza y expuesta a un alto grado de vulnerabilidad y dependiendo de la caridad de mis familiares, lo cual es contrario a los principios que gobiernan la seguridad social como derecho fundamental constitucional consagrado en el art. 48 superior, ellos son: la solidaridad, solidaridad y eficiencia respectivamente.

NOVENO: Teniendo en la cuenta que las incapacidades sustituyen el salario y permiten que no se menoscaben derechos fundamentales constitucionales acudo al juez de tutela como único medio de defensa al no contar con los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado, pero, ante todo, por estar expuesta a comportar un alto grado de vulnerabilidad por ser la parte más débil de la relación laboral circunstancia en la cual, según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, la tutela es el medio más idóneo y eficaz para atender asuntos de esta naturaleza.

II. PETICION ESCENCIAL:

Pido respetuosamente al señor operador judicial, que mediante sentencia de tutela ordene a las accionadas **ARL AXA COLPATRIA** y **SALUD TOTAL** el pago de todas mis incapacidades GENERADAS DESDE AGOSTO DE 2022 HASTA MARZO DEL AÑO EN CURSO , ante las dilaciones injustificadas y el trato discriminatorio, porque me remite una entidad a la a otra y viceversa bajo el argumento que el origen de unas incapacidades son de origen laboral y otras incapacidades de enfermedad general u origen común, con lo cual se intensifican mis afectaciones de salud, teniendo que no percibo salario, ni ningún concepto de dinero que me ayude en la actualidad con mi sustento y el de mi familia toto esto teniendo en cuenta que el salario garantiza la vida, el derecho al mínimo vital de movilidad y los demás derechos invocados en el presente escrito tutelar

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Honorable corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, frente al tema de la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales ha expresado:

: “...*La vulneración y amenaza de los derechos fundamentales son causas claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde a efectuar los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública, o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención puede tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiérrela confluencia del elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que vé*

peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos...” (Tomado el anterior párrafo de la Sentencia T-439 de julio 2 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Corte Constitucional)

DEL MINIMO VITAL:

El Sistema General de Seguridad Social establece la protección a la que tienen derecho aquellos trabajadores que, en razón a la ocurrencia de un accidente laboral o una enfermedad de origen común, se encuentran incapacitados para desarrollar sus actividades laborales y, en consecuencia, están imposibilitados para proveerse sustento a través de un ingreso económico. Dicha protección se materializa mediante diferentes figuras tales como: el pago de las incapacidades laborales, seguros, auxilio y pensión de invalidez contempladas todas estas, en la Ley 100 de 1993^[71], Decreto 1049 de 1999, Decreto 2943 de 2013^[72], la Ley 692 de 2005, entre otras disposiciones.

Las referidas medidas de protección buscan reconocer la importancia que tiene el salario de los trabajadores en la salvaguarda de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. Así lo ha sostenido esta Corporación al referirse particularmente a las incapacidades, estableciendo que el procedimiento para el pago de las mismas se han creado “(...) en aras de garantizar que la persona afectada no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento económico a título de incapacidad o de pensión de invalidez, cuando sea el caso. Tal hecho permite concluir que el Sistema de Seguridad Social está concebido como un engranaje en el cual se establece que ante una eventual contingencia exista una respuesta apropiada”^[73]

Bajo esa línea, la Corte mediante sentencia T-490 de 2015 fijó unas reglas en la materia, señalando que:

“i) el pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el tiempo que por razones médicas está impedido para desempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar;

ii) el pago de las incapacidades médicas constituye también una garantía del derecho a la salud del trabajador, pues coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia; y

iii) Además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra en estado de debilidad manifiesta.”

En consecuencia, durante los periodos en los cuales un trabajador no se encuentra en condiciones de salud adecuadas para realizar las labores que le permitan devengar el pago de su salario, el reconocimiento de incapacidades

constituye como una garantía de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. De allí, que la Corte reconozca que sin dicha prestación, se presume la vulneración de los derechos en mención.

DEL RESPETO POR EL DEBIDO PROCESO

El Debido Proceso es un principio en el cual se inspira Colombia, como estado social, democrático y de derechos. Cuando una autoridad pública o privada impide el acceso a la administración a sus gobernados, además de abogar el Principio de Confianza Legítima, quebranta el Derecho fundamental al Debido Proceso consagrado por el constituyente en el art. 29 de nuestra Norma Superior.

El Debido Proceso está instituido como toda una garantía obligatoria que debe caracterizar y revestir la actuación pública o los privados que cumplan o desarrollen actividades de origen público.

Sin Debido Proceso no es posible el respeto Dignidad humana en Colombia en el contexto como Estado Social, donde el respeto por la Constitución es el eje central de la convivencia pacífica. El Estado no puede sorprender al gobernado con decisiones súbitas.

DE LA DIGNIDAD HUMANA:

Considerada según la Honorable Corte Constitucional como una ENTIDAD NORMATIVA, además es un Principio sobre la cual está fundada la Carta Política actual y así lo decanta con una solvencia magistral todo el pensamiento y la línea jurisprudencial del alto tribunal en su fallo T-881 de 2002, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, del cual es el siguiente pasaje:

“...10 Para la Sala una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “Dignidad Humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.

“Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “Dignidad Humana” la Sala ha identificado a lo largo de la

jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como diseñar un plan vital de determinarse según sus características (Vivir como quiera).(ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (Vivir bien).(iii) La dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (Vivir sin humillaciones). “De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad del enunciado normativo “Dignidad Humana” la Sala ha encontrado tres lineamientos: (i) La dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto, del Estado y en ese sentido la dignidad humana como Valor (ii) La dignidad humana entendida como Principio Constitucional (iii) La dignidad humana entendida como derecho

fundamental autónomo. “11. Estos seis aspectos no representan de manera alguna una postura definitiva y restringida del objeto protegido, del mandato de la acción, de las razones normativas o de la configuración de los límites, en que el enunciado normativo de la “Dignidad Humana” se concreta.

Por el contrario encuentra y reconoce la Sala, la riqueza conceptual como funcional de la dignidad humana como concepto normativo, de tal forma que el énfasis o el acento que resulte puesto en uno de los sentidos expresados para efectos de la argumentación y en general de la solución jurídico-constitucional de los casos concretos, no implican la negación o pérdida de validez de los demás, incluso, de las que no aparecen relacionadas en éste fallo...”

Tenemos entonces, que el legislador instituyó por medio del BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, también otro Principio Constitucional indispensable: INTEGRACION NORMATIVA, contenido en el artículo 93 del Estatuto Supremo, por medio del cual el actor pretende que se mantenga incólume la conexidad entre cada uno de los derechos fundamentales constitucionales y otros, aunque no se hayan deprecado por la suscrita libelista.

IGUALDAD ANTE LA LEY

La vigencia de la ley conlleva su “eficacia jurídica”, entendida esta como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia “desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor”. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos.

En reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional definió el derecho a la igualdad como un parámetro constitucional que consiste en “la prerrogativa que tiene toda persona a gozar de un mismo trato y protección por parte de las autoridades, así como tener los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin que sea admisible cualquier tipo de discriminación. La aplicación de este derecho fundamental cuenta con una visión positiva y otra negativa: la primera, se traduce en la

equivalencia de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentran en la idéntica posición frente a otras; y la segunda, en la divergencia de trato respecto de las que presenten características diferentes”. Concluyó que, en principio, “se debe brindar trato igual a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y, en consecuencia, “dar trato divergente a quienes se encuentren en situaciones dispares”.

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE TUTELAS PARA RECLAMAR PAGO DE INCAPACIDADES.

La Corte Constitucional ha precisado que existen eventos en los que es posible que el juez de tutela desate controversias relacionadas con el reconocimiento de

incapacidades médicas, dependiendo de las circunstancias del caso, para garantizar al afectado y su familia un mínimo vital y una vida digna. Reiterando lo señalado en la Sentencia **T-008 de 2018**.

“(…) Así las cosas, el mecanismo idóneo para solucionar las controversias sobre el reconocimiento y pago de incapacidades que puedan presentarse entre un afiliado y las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral o su empleador, corresponde a la justicia ordinaria.

Sin embargo, cuando el pago de incapacidades laborales constituye el único medio para la satisfacción de necesidades básicas, la acción de tutela también se convierte en mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental al mínimo vital (...).

(...) En síntesis, la Corte Constitucional ha reconocido que la interposición de acciones de tutela para solicitar el pago de incapacidades laborales es procedente, aun cuando no se han agotado los medios ordinarios de defensa, cuando de la satisfacción de tal pretensión dependa la garantía del derecho fundamental al mínimo vital.

De esta manera, no basta con la existencia de medios de defensa judiciales para establecer la improcedencia de la acción de tutela, sino que debe determinarse si los mismos son idóneos y eficaces (...).”

3.2.3 Pago de incapacidad laboral superior a 180 días.

El órgano de cierre Constitucional ha decantado que:

“El pago de incapacidades médicas laborales por enfermedad de origen común está a cargo de la EPS durante los primeros 180 días. A partir del día 181 y hasta el día 540, los pagos deben ser realizados por la Administradora de Pensiones. Luego, a partir del día 541, corresponde a la EPS asumir tales costos, sobre los cuales podrá solicitar el respectivo reembolso ante la ADRES de conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos judiciales expuestos en este acápite”.¹

3.2.4 Ahora bien, en lo concerniente a incapacidades por enfermedad de origen común, la Corte Constitucional mediante sentencia T 200 de 3 de abril de 2017, magistrado ponente José Antonio Cepeda Amarís señaló lo siguiente:

¹ Ibídem.

De acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia, dependiendo del tiempo de duración de la incapacidad, la remuneración recibida durante ese lapso podrá ser denominada **auxilio económico**[17] si se trata de los primeros 180 días contados a partir del hecho generador de la misma, o **subsidio de incapacidad**[18] si se trata del día 181 en adelante. La obligación del pago de incapacidades está distribuida de la siguiente manera:

- i. Entre el día 1 y 2 está a cargo del empleador según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2943 de 2013.[19]
- ii. Entre el día 3 y 180 a cargo de la EPS según el mismo decreto.
- iii. Desde el día 181 y hasta un plazo de 540 días, el pago de incapacidades está a cargo del Fondo de Pensiones, de acuerdo con la facultad que le concede el artículo 52[20] de la Ley 962 de 2005 para postergar la calificación de invalidez, cuando haya concepto favorable de rehabilitación por parte de la EPS.[21]

Ahora bien, hasta antes del año 2015, la Corte Constitucional venía reconociendo y advirtiendo la existencia de un déficit de protección de las personas que tuvieran concepto favorable de rehabilitación, calificación de pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, y siguieran siendo incapacitadas por la misma causa más allá de los 540 días. En su momento, la sentencia T-468 de 2010[22] de esta Corporación señaló:

“(...) aunque en principio se diría que las garantías proteccionistas del sistema integral de seguridad social son generosas, esta Sala repara en el hecho de que no existe legislación que proteja al trabajador cuando se le han prolongado sucesivamente incapacidades de origen común y que superan los 540 días. Son muchos los casos en que las dolencias o las secuelas que dejan las enfermedades o accidentes de origen común que obligan a las EPS o demás entidades que administran la salud a certificar incapacidades por mucho más tiempo del estipulado en el Sistema Integral de Seguridad Social y que a pesar de las limitaciones físicas la pérdida de la capacidad laboral no alcanza a superar el 50% y por tanto, tampoco nace el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, lo que deja al trabajador en un estado de desamparo y sin los medios económicos para subsistir.”

Y agregó:

“En esta situación, el trabajador está desprotegido por la falta de regulación legal en la materia, ya que no existe claridad de cuál sería la entidad de protección social que debe asumir el pago del auxilio por incapacidad, situación que empeora si el empleador logra demostrar ante el Ministerio de Protección social que en virtud de la incapacidad del trabajador no es posible reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro similar, operando de esta manera el despido con justa causa contenido en el artículo 62, numeral 14 del código sustantivo del trabajo.”

En consecuencia, el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1753 de 2015, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo comprendido entre 2014 y 2018, dio una solución a este déficit de protección, al otorgar la responsabilidad del pago de incapacidades superiores a 540 días a las EPS. Según el artículo 67 de la mencionada ley, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán destinados, entre otras cosas “[a] reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de Salud por el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el pago de incapacidades por enfermedad de origen común que superen los quinientos cuarenta (540) días continuos.”[23]

La Corte Constitucional ya ha ordenado la aplicación de esta disposición por vía de tutela en la sentencia T-144 del 2016. En su momento, esta Corporación conoció el caso de la ciudadana Maritza Cartagena, quien en el mes de octubre de 2011 sufrió un accidente en motocicleta al chocar con un vehículo de transporte escolar. En el incidente sufrió varias fracturas que le provocaron incapacidades de más de 540 días. Recibió calificación del Fondo de Pensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que no superaba el 50% de pérdida de capacidad laboral, pero apeló este último dictamen por considerar que no respondía a su estado real de salud física y mental.

Para la Corte, la entrada en vigencia de esta norma, cambia el panorama del pago de incapacidades después de 540 días que se venía planteando en la jurisprudencia de años atrás, pues se le atribuyó la obligación del pago a las EPS como parte del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Con estos antecedentes legales y jurisprudenciales, no cabe duda alguna de que la regla actual de incapacidades que superan 540 días para personas que no han tenido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, es que deben asumirlas las EPS.

Pero además, la sentencia en cuestión establece tres reglas para el análisis de este tipo de casos, la primera, es que reitera la necesidad de garantizar protección reforzada a los trabajadores que han visto menoscabada su capacidad laboral, tienen incapacidades prolongadas, pero no son considerados inválidos; la segunda, es que la obligación impuesta por el Plan Nacional de Desarrollo, respecto al pago de tales incapacidades es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades; y la tercera, es que podrá concederse una aplicación retroactiva en virtud del principio de igualdad.

Frente a la primera regla, la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:

“Las personas incapacitadas de forma parcial y permanente, se encuentran en una situación adversa, en la medida en que no tienen la plenitud de la fuerza de trabajo, pero no son consideradas técnicamente inválidas. En estos casos es claro que

existe una obligación en cabeza del empleador de reintegrar al afectado a un puesto de trabajo que esté acorde a sus nuevas condiciones de salud. En otras palabras el trabajador se hace acreedor del derecho a la estabilidad laboral reforzada, desarrollado por esta Corte a partir del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.”**[24]**

Refiriéndose a la segunda regla, esta Corporación señala que el déficit de protección para trabajadores que superan 540 días de incapacidad se entiende superado por la Ley 1753 de 2015 y que a partir de su entrada en vigencia, tanto “(...) el juez constitucional, las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social y los empleadores deberá acatar (...)” No obstante, es preciso tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo, es por naturaleza una norma cambiante y en consecuencia el déficit de protección podría volver a presentarse.

Respecto a la tercera regla, la Corte explica que existe la posibilidad de dar aplicación retroactiva al artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, pues ésta no establece un régimen de transición para los casos ocurridos antes de la promulgación de la ley, generando un trato desigual. En palabras textuales esta Corporación señaló: “(...) [la] situación de desigualdad tiene un fundamento legal que es entendible desde el punto de vista de las reglas de vigencia y aplicación de las leyes. Sin embargo, genera una tensión constitucional que no puede ser omitida por la Corte, pues a la luz del principio de igualdad material, no hay razón para diferenciar y beneficiar sólo a un grupo de personas, en virtud de una consideración temporal, a sabiendas de que la situación se evidenciaba con anterioridad. Es decir, no hay una justificación constitucionalmente válida para fijar tal diferencia en la posibilidad de protección legal.”

Sobre la base de lo previsto en la Ley 1753 del 2015, el régimen de pago de incapacidades por enfermedades de origen común tiene actualmente las siguientes fases y encargados:

Periodo	Entidad obligada	Fuente normativa
Día 1 a 2	Empleador	Artículo 1 del Decreto 2943 de 2013
Día 3 a 180	EPS	Artículo 1 del Decreto 2943 de 2013
Día 181 hasta un plazo de 540 días	Fondo Pensiones de	Artículo 52 de la Ley 962 de 2005

Día 541 en adelante	EPS[25]	Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015
---------------------	---------	------------------------------------

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con este tema ha establecido que el origen de la incapacidad determina la hoja de ruta para establecer con claridad cuál es la entidad, bien sea que pertenezca al Sistema General de Seguridad Social en Salud o al Sistema General de Riesgos Laborales, que tiene la obligación de pagar las incapacidades, en concordancia con las diferentes reglas temporales que operan en los casos de enfermedades de origen común.

Ahora bien, aun cuando el desarrollo normativo y jurisprudencial previo al año 2015, daba cuenta de la existencia de un déficit de protección para incapacidades que superaran los 540 días consecutivos, esta Sala encuentra que tal circunstancia ha sido satisfecha por el artículo 67 de la Ley 1573 de 2015, al menos mientras se encuentre vigente el Plan Nacional de Desarrollo”.

JURAMENTO

Declaro bajo la gravedad del juramento que por estos hechos no he promovido ninguna Acción de tutela ante otra autoridad, obro bajo los principios de buena fe y confianza legítima, sin pretender obrar con algún tipo de temeridad.

PRUEBAS

A efectos de que sea verificado mi problema jurídico y sean amparados mis derechos, adoso las siguientes probanzas en copia fotostática:

Solicito encarecidamente que se solicite a la EPS SALUD TOTAL certificado de incapacidades actualizado porque se han negado a entregármelo

- Certificado de incapacidades
- Calificación de PCL emitido por Seguros Alfa S.A.
- Copia de Historia Clínica reciente
- Copia de mi cédula de ciudadanía

NOTIFICACIONES:

Primero A la parte Accionada a ARL AXA COLPATRIA en la Avenida 19 Nro. 125-65, Oficina 203, Edificio Avenida 19, Bogotá D.C.

Segundo: A la entidad Salud Total en la Avenida 3 Norte Nro. 19 N-03 de Cali, Valle.

Email: notificacionesjud@saludtotal.com.co

Tercero: A la suscrita Accionante en la Cra. 4 Nro. 10-44, Apartamento 4-17,
Edificio Plaza de Cayzedo de Cali, Valle.
Email: grupojuridicojireh@outlook.es

Sin más consideraciones de orden legal y jurídico,

Martha Micolta

MARTA MICOLTA PADILLA

C.C. 66.983.669

Actora